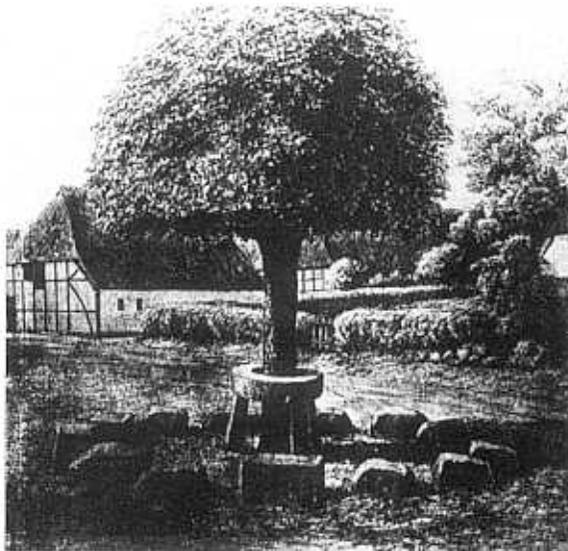


Elites y nacionalismo español

José Álvarez Junco



1. Introducción. El marco del problema. Los retos actuales en los estudios sobre el nacionalismo

Los enfoques que pudiéramos llamar clásicos sobre el nacionalismo, es decir, los dominantes hasta los años sesenta: Hans Kohn 1944, 1965, 1968; o Carlton Hayes 1933, 1960, por ejemplo, partían de dos presunciones fundamentales. La primera, que las naciones eran un fenómeno natural, una *realidad*, basada en factores tan innegables como la existencia de diferencias raciales, lingüísticas o religiosas entre los individuos y grupos humanos. De esta constatación se derivaba, como consecuencia política, el principio de las nacionalidades, es decir, el derecho de cada uno de estos grupos diferenciados a poseer un Estado o estructura de poder propia. El problema, por tanto, consistía en establecer los factores —en los términos más «objetivos» posibles— que dividían a la humanidad en etnias o naciones, para a continuación reconocerles su derecho a la autodeterminación y trazar el mapa político ideal acorde con tales unidades naturales.

Pero esta primera parte del esquema se topó siempre con una dificultad insoslayable: que los grupos étnicos existentes, y más aún los Estados-nación que se proclamaban sus representantes, incluidos los que poseían una conciencia de identidad más diferenciada, en ningún caso alcanzaban el grado de homogeneidad cultural presupuesto por la teoría; sus individuos componentes se asemejaban entre sí en algunos de sus rasgos básicos, pero nunca todos ellos ni mucho menos en *todos* los rasgos. En cualquiera de los pueblos o Estados-nación conocidos se encuentra la diversidad en algún aspecto determinante para la identidad nacional, bien sea el lingüístico (Suiza), el religioso (Alemania), el racial (Estados Unidos), etc. De ahí que los estudiosos de la cuestión tendieran a añadir un elemento subjetivo sobre el que, en último extremo, se cargaba todo el peso, que Renan había definido en el siglo XIX mejor que nadie como el *plebiscito cotidiano*, «la voluntad persistente de ser nación»; en definitiva, había que reconocer que eran naciones aquellos grupos humanos que *querían* ser naciones. Ello pareció resolver el problema, y así lo creía un Ortega y

Gasset, por ejemplo, que no dudaba de la existencia de naciones, definidas por él como «proyectos sugestivos de vida en común». El elemento subjetivo, sin embargo, también iba a plantear a la larga problemas insolubles a los creyentes en las naciones. Ante todo, porque se comprendió que los Estados desempeñaban un papel relevante en la orientación de sus ciudadanos hacia una determinada identidad nacional (con objeto de asegurarse la lealtad, el resultado favorable de ese plebiscito cotidiano); algo que contradecía de lleno el presupuesto básico de la teoría nacionalista: que lo étnico es la realidad primordial y lo político su resultado. Enseguida volveré sobre esta cuestión (que, por otra parte, he tratado en Álvarez Junco, 1994).

La segunda presunción fundamental en la visión clásica del nacionalismo consistía en considerarlo un fenómeno ideológico, un credo político explícito, como el liberalismo, el socialismo o el fascismo. De ahí la pretensión de estudiarlo a través de los textos de los teóricos o pensadores que habrían inspirado o dirigido los movimientos nacionales, y la inevitable referencia, en cualquier libro sobre el nacionalismo de hace más de un cuarto de siglo, a Rousseau, Herder o el romanticismo. Lo cual envolvía ya alguna contradicción, porque si las naciones eran realidades naturales, y los sentimientos nacionalistas impulsos innatos en cualquier individuo psicológicamente sano, no tenía mucha lógica estudiar su aparición en la historia a partir de la obra de determinados teóricos o pensadores eminentes. La —débil— explicación con que se solventaba este problema era que la genialidad de estos autores había consistido en expresar o dar forma, no en inventar, realidades y sentimientos pre-existentes y difusos.

Más grave aún era la objeción de que bajo el término nacionalismo se englobaban fenómenos muy diversos y que la mayor parte de ellos no se traducían en declaraciones expresadas y articuladas, lo cual quería decir, entre otras cosas, que no podían ser estudiados en la obra de ideólogos. El nacionalismo tiene, sin duda, un aspecto teórico o doctrinal si se reduce, sin más, al principio de las nacionalidades (derecho de los pueblos a convertirse en Estados), o a su aplicación a una de esas colectividades sociales cuyo reconocimiento como nación se defiende. Pero previo a este primer sentido debe reconocerse que el nacionalismo presupone la *creencia*

—no necesariamente explícita— en la existencia de naciones, es decir, de grupos humanos con diferencias culturales nítidas, una creencia que puede llegar a incluir su jerarquización y la consiguiente superioridad, y derecho a la dominación, de algunos de ellos sobre otros. Tanto la creencia en las naciones como la defensa explícita de una de ellas suele envolver también un *sentimiento* de identificación con uno de esos entes colectivos —un tercer significado; y, de nuevo, frecuentemente no explícito—; y este contenido emotivo del término «nacionalismo» admite muchas gradaciones, que cambian sustancialmente su sentido: desde una identificación más o menos neutra, de mero reconocimiento de que se poseen los rasgos propios del entorno humano en que se ha nacido, hasta un deseo, en algunos casos exacerbado, de que nuestro grupo nacional supere y exceda a los otros en todos los terrenos. Por último, se llama asimismo nacionalista a una *actitud* o *conducta* destinada a poner en práctica tales creencias y sentimientos, bien sea con el fin de conseguir un Estado propio para nuestra nación (actitud o conducta que cuando es adoptada por un amplio número de personas da lugar a un *movimiento* nacionalista) o bien con el de expandir el poder de nuestro Estado-nación actual (lo cual se traduce en una *política* nacionalista *activa*, frecuentemente de signo militarista).

El reconocimiento de toda esta complejidad ha obligado a un radical replanteamiento del problema, que ha tenido lugar en las últimas dos décadas. Para empezar, se ha escapado por completo del monopolio de historiadores y científicos políticos y es ahora objeto de estudio por parte de los más diversos científicos sociales. Precursores en el cambio de enfoque fueron sociólogos como K. Deutsch (1954) y E. Kedourie (1961), pero a sus trabajos se han sumado otros sociólogos como Anthony Smith (1979, 1983, 1987), politólogos como G. Mosse (1975, 1985), M. Hroch (1985) o E. Gellner (1987), antropólogos como H. Isaacs (1975), historiadores como E. Weber (1976), E. Hobsbawm (1990), o B. Anderson (1991). Simplificando enormemente, sus aportaciones pueden sintetizarse en dos grandes apartados:

El primero, el carácter contingente del fenómeno nacional. Las naciones no han sido realidades constantes en la historia humana, sino que se trata de un fenómeno reciente, vinculado

de alguna manera a la llegada de la modernidad (aunque sobre esto los autores difieren enormemente: hay quienes lo remontan al protestantismo y la invención de la imprenta y quiénes lo retrasan hasta la revolución industrial, pero en todo caso se liga al surgimiento de amplios espacios político-económicos necesitados de una homogeneidad cultural...). Antes de ese momento, no había Estados-nación (Estados que pretenden o aparentan ser naciones), sino muy diversas fórmulas políticas en todas las cuales dominaba, sin escándalo de nadie, la multiétnicidad. Sólo tras las revoluciones liberales y el romanticismo —cuando *el pueblo* sustituyó al monarca como titular de la soberanía— se estableció el principio de las nacionalidades y comenzó a exigirse que los marcos políticos se ajustaran a las personalidades étnicas colectivas para poseer legitimidad. A partir de ese momento, los ideólogos y dirigentes (o aspirantes a dirigentes) políticos emprendieron una inmensa tarea de reinterpretación de toda la historia previa, simplificando el complejo mosaico de infinitas identidades culturales entrecruzadas que ha sido típico de la humanidad en todas las épocas para concentrarlo en lo nacional, el núcleo a partir del cual se derivaban los derechos políticos. En la actualidad, la historia de nuestra especie tiende a recobrar su complejidad y se comprende que el nacionalismo ha sido una de sus fases, reciente, breve y de consecuencias, por cierto, nada estabilizadoras.

La segunda gran conclusión hacia la que apuntan los estudios actuales es el carácter construido e instrumental de los mitos nacionales. Como dedujo con enorme agudeza Elie Kedourie (1961), si se acepta la formulación de Renan sobre las naciones como identidades en definitiva basadas en la voluntad de ser nación (y cualquier otra explicación, como vimos, se encuentra con múltiples contraejemplos), hay que reconocer que tal «voluntad» puede ser fomentada por alguien interesado políticamente en la tarea, lo cual contradice de lleno la presunción de naturalidad de tales sentimientos nacionales. Los Estados mismos, más preocupados que nadie por el mantenimiento de la estabilidad política, inculcan los sentimientos nacionales a través de la escuela, el ejército y los múltiples canales de socialización que caen bajo su esfera de influencia, y así crean una identidad que simultáneamente proclaman previa a ellos y base de su legitimidad. El fenómeno

no es bien conocido en los países de inmigrantes (Argentina, Estados Unidos), en los Estados recién formados (el famoso «ya tenemos Italia; ahora hay que crear italianos», de Massimo d'Azeglio) o recién descolonizados (que se enfrentan con el nada despreciable reto de enseñar a los miembros de las distintas tribus o culturas indígenas que «son» nacionales de esos entes cuyas nuevas fronteras les dividen ahora: explicar, por ejemplo, a los mayas que por encima de todo son mejicanos o guatemaltecos, o a los quéchuas que son ecuatorianos o peruanos). Pero el descubrimiento novedoso es que procesos muy similares se pusieron en marcha en los viejos Estados europeos a lo largo del siglo XIX, un período de frenética invención de tradiciones nacionales (Hobsbawm y Ranger, 1983). Es decir, que las identidades colectivas son siempre una creación de (o están manipuladas por) actores políticos preexistentes, sean Estados o sean élites que aspiran a construir marcos políticos alternativos.

En mi opinión, de lo que se trata ahora es de avanzar a partir de estos presupuestos. Y las principales cuestiones que deben ser planteadas de manera inmediata son las siguientes:

1.º *La relación entre las identidades nacionales contemporáneas y las identidades colectivas pre-existentes* (en el caso europeo, las derivadas de los reinos dinásticos de los siglos XVI a XVIII), problema especialmente apasionante para los historiadores. Es cierto que el nacionalismo es un fenómeno de los últimos siglos, pero eso no quiere decir que no existieran previamente grupos étnicos basados en las diferencias de religión, raza, lengua, etc. Los imperios antiguos convivieron con la multiculturalidad, sin duda, pero eso no siempre ocurrió sin problemas (aunque, desde luego, estos nunca se expresaran en términos de «derecho a la autodeterminación nacional»). En ocasiones, como he dicho, esas identidades se crearon precisamente debido a la existencia de unas estructuras políticas, un proceso especialmente patente en la época de las monarquías europeas de la llamada Edad Moderna. Muchas de esas monarquías, como los imperios austríaco o turco, estaban destinadas a disolverse o a reducir sustancialmente su territorio, víctimas precisamente del nacionalismo, y a ser sucedidas por los Estados-nación actuales. Pero otras, re-legitimadas en términos nacionalistas, supieron

subsistir con plena fuerza durante la era contemporánea: tal fue el caso de Francia, país en el que la revolución y las sucesivas repúblicas culminaron muchos de los planes de los Borbones; o de Inglaterra, cuya hegemonía imperial coincidió con la era nacionalista.

En todo caso, los constructores de los mitos nacionales bebieron, sin la menor duda, de esas identidades previas; las naciones no se inventaron, ni se inventan, de la nada. El término mismo «nación» era de uso común desde la Edad Media para referirse a los grupos humanos que compartían un mismo lugar de nacimiento y una misma lengua; su significado no es equivalente al del siglo XIX, pero la diferencia es de grado (los nacionales o «naturales» de estos grupos disputaban sobre los distintos títulos de gloria de los mismos, y se consideraba el «amor a la patria» un sentimiento legítimo, aunque quizá un tanto provinciano). Algunos autores han designado a este fenómeno, típico de la Edad Moderna europea, como *pre- o proto-nacionalismo*. Preferiría proponer el término *etno-patriotismo*, ya que, como digo, tanto el reconocimiento de la existencia de identidades colectivas étnicas, basadas en la raza o la lengua, como la idea de «patria» y de vinculación afectiva a la misma son muy anteriores a la era de los nacionalismos; lo que en cambio no existe hasta las revoluciones anti-absolutistas es el *nacionalismo*, cuya peculiaridad es la conversión de la etnia en sujeto de la soberanía política; por lo demás, conceptualizar un fenómeno como precedente o antecedente de lo que vino luego es una técnica de designación nada recomendable.

2.º *El análisis de los procesos de nacionalización o «etnicización» de segmentos sociales que acaban convirtiéndose en naciones, con especial atención al papel de las élites que dirigen esos procesos.* El nacionalismo político se ve siempre precedido por una primera fase, que suele llamarse de «nacionalismo cultural», en la que se crean o construyen (se *inventan*, según el término puesto en boga por Hobsbawm 1983; aunque el término es algo excesivo, pues sugiere una creación totalmente arbitraria, lo cual, según veremos enseguida, no es el caso) los mitos, la simbología, el discurso en el que se condensa la identidad nacional. Para ello es necesario establecer los límites o *fronteras de exclusión* del grupo con sus vecinos, cosa que puede hacerse en términos pseudo-científicos, como por ejem-

plo basando la personalidad colectiva en unos rasgos raciales que le confieren un carácter distintivo, y normalmente superior; o en términos pseudo-históricos, evocando una memoria colectiva de la nación en la que se acentúan las glorias y, sobre todo, los agravios: las derrotas militares, las ofensas contra sus símbolos, la explotación económica, las atrocidades sufridas. La *identificación del enemigo* logra su máxima eficacia si concentra las responsabilidades en sólo uno de los vecinos, por supuesto coincidente con el rival político contra el que las élites nacionalistas llaman ahora a rebato. Tras definir al enemigo —o a la vez: esta definición negativa es frecuentemente lo que proporciona identidad propia— se hace preciso crear los símbolos identificadores o *fronteras de inclusión*: bandera, himno, monumentos o lugares que representan la tradición nacional, elementos culturales (lengua, atuendo) que distinguen a los pertenecientes al yo colectivo en cuestión; unos símbolos que, desde el punto de vista histórico, suelen hacer referencia a un pasado ideal mitificado, a una Edad de Oro en la que el ideal fraternal/comunitario se realizó en su plenitud, y al que en buena medida se pretende retornar con el proyecto político propugnado por los nacionalistas. Toda esta tarea culmina con la elevación de estos elementos (la simbología, sobre todo) a un cierto nivel de *sacralidad*, un terreno en el que las naciones han asumido muchas de las fórmulas, los ritos y las funciones de la religión.

La nacionalización o etnicización del conjunto social se realiza por élites promotoras o *empresariales* —aplicándoles el término que se ha usado para los dirigentes de los movimientos sociales en general— del nacionalismo. Unas élites que casi inevitablemente deben calificarse de *intelectuales*, ya que un rasgo del que no pueden carecer es capacidad para influir en la percepción cultural de la realidad por parte del resto de la sociedad. La sociología histórica debería, por tanto, concentrarse en el estudio de estas élites y de sus medios de influencia cultural. Cuando el promotor del nacionalismo sea el Estado, no basta con reconocerlo así; habría que determinar qué clases sociales o grupos corporativos tienen el Estado bajo su control en el momento de la oleada nacionalista, y prestar especial atención a la función y los intereses de los creadores o difusores de productos culturales: ideólogos oficiales, burocracias, cuerpos do-

centes de sistemas públicos, profesionales liberales de procedencia urbana que desempeñen sus tareas en medios rurales...

3.º *Las funciones o fines a los que sirve el nacionalismo.* Este es un terreno más vidrioso, ya que probablemente ninguna de las fórmulas políticas actualmente vigentes tiene mayor versatilidad funcional. El nacionalismo ha demostrado ser el mito movilizador de mayor maleabilidad, y, por ende, de capacidad de supervivencia, en el mundo moderno. Lo cual sorprendería a los más eminentes historiadores y analistas políticos de hace sólo un siglo, o incluso medio, apoyados como estaban en interpretaciones racional-progresistas de la evolución de la historia humana —tanto en su versión individualista liberal como en la marxista— y, por tanto, convencidos de que los conflictos políticos futuros se orientarían en función de preferencias ideológicas o intereses materiales más que siguiendo apelaciones étnicas. Mas lo cierto es que son los ingredientes nacionalistas los que han formado parte, nada secundaria por cierto, de casi todas las movilizaciones políticas de los últimos dos siglos: el nacionalismo se ha combinado con la pura libertad liberal en las revoluciones euro-americanas de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX; con la democracia radical en las revoluciones de 1848; con el crecimiento económico y la potencia militar en la era de las rivalidades etno-imperiales europeas que culminaron en la Primera Guerra Mundial y los fascismos; con la liberación anti-colonial, en los movimientos de emancipación de los pueblos no europeos a mediados del siglo XX; con la modernización y la homogeneización cultural, incluso a costa del desarraigo de rectificación de tradiciones heredadas, en la Turquía de Atatürk o la Francia de la III República; con el socialismo en la URSS de Stalin, en los regímenes post-coloniales africanos, en la China maoísta o en la Cuba castrista...

Así pues, además de los dos objetivos en principio obvios en todo nacionalismo (el reforzamiento, hasta niveles religiosos, de la devoción o lealtad que inspiran los Estados; y lo contrario: la legitimación de movimientos subversivos, tendentes a rectificar las fronteras políticas existentes), la fórmula puede servir a otros múltiples fines. Puede, desde luego, ser un mero recurso oportunista, utilizado por élites que pretenden reemplazar a las dominantes y que para ello se postulan como legítimos repre-

sentantes de la nación, en lugar de serlo, por ejemplo, de la divinidad o de un linaje hereditario. Pero la promesa nacional puede servir de envoltorio para promesas mucho más grandiosas, como la eliminación de la injusticia, gracias a la reintegración en una comunidad nacional utópicamente armónica; o la de la escasez, por medio de una decidida voluntad de fomentar por encima de todo el desarrollo y el bienestar del grupo nacional; o el enderezamiento de un entuerto histórico, afirmando los derechos del Estado que representa a esa nación frente a otros Estados-nación. De ahí que se asocien con el nacionalismo proyectos políticos de los más variados signos: movimientos conservadores, que apoyan su defensa de las tradiciones en la idea de identidad nacional; programas democratizadores, para los que soberanía nacional equivale a soberanía popular; revoluciones socialistas, que colectivizan para los nacionales de un territorio las riquezas que éste contiene; planes industrializadores o desarrollistas, que pretenden poner a la nación en condiciones de competir con los rivales extranjeros; o políticas expansivas, militaristas e imperiales.

En la segunda parte de este artículo, me plantearé alguno de estos problemas en relación con el caso español, con especial atención a las élites nacionalistas y la orientación de su proyecto político durante la primera mitad del siglo XIX, esto es, durante la guerra anti-napoleónica y las fases iniciales de la revolución liberal. Dado el escaso número de estudios existentes tanto sobre las élites dirigentes como sobre los procesos de etnicización o nacionalización en términos españolistas, y dada también la amplitud del período que quisiera cubrir en pocas páginas, el carácter de las hipótesis interpretativas globales que me arriesgaré a ofrecer será, necesariamente, especulativo y provisional.

2. España. Elites modernizadoras e identidades colectivas al abrirse la era de los nacionalismos

uando la era de las naciones se inició en Europa, en los territorios peninsulares de la monarquía hispánica existía una de las identidades etno-patrió-

ticas más marcadas de Europa. Esta afirmación contradice muchas de las que se leen hoy día en literatura apologética de los nacionalismos que compiten con el español monolítico tradicional, pero lo cierto es que en la «España» del giro del siglo XVIII al XIX se distinguían la mayoría de los rasgos culturales propios de las futuras naciones: una misma religión (el catolicismo, un rasgo con el que se identificaba la totalidad del conjunto social, aunque por supuesto no era privativo de España), una raza (producto de múltiples mezclas, pero que había alcanzado considerable homogeneidad, una vez expulsados u obligados a fundirse con el conjunto social árabes y judíos) y un pasado histórico común (que se remontaba a trescientos años, pues desde la conquista de Granada y la anexión de Navarra una misma monarquía dominaba el territorio coincidente con la actual España). Solamente la lengua carecía de unidad, y aun en ese terreno la monarquía podía presumir de una homogeneidad, no ya similar, sino incluso superior a la francesa o inglesa, ya que el castellano era hablado en la gran mayoría de su territorio (aunque podría entablarse un debate sin fin sobre el porcentaje exacto) y no había grandes abismos entre el castellano de los aristócratas y el de las clases medias urbanas o el de los campesinos. De hecho, tanto los habitantes de la Península como los foráneos aceptaban la identidad «española» como una de las realidades naturales de Europa, y las disquisiciones sobre lo fascinante de este carácter nacional iban a ser uno de los temas literarios tópicos en el romanticismo.

El período llamado contemporáneo se abrió en la historia de España con la guerra antinapoleónica de 1808-1814. Fue éste un conflicto complejo, en el que se fundieron una guerra civil (bonapartistas frente a borbónicos) y una guerra internacional (ejércitos franceses frente a ingleses), no muy distinto a lo ocurrido cien años antes, también alrededor de un cambio de dinastía y de la rivalidad franco-inglesa. Pero 1700 era demasiado pronto para justificar una guerra como nacional, y en 1808 en cambio los partidarios de Fernando VII supieron presentar su causa como una reacción defensiva frente a una invasión extranjera. Los adictos a José Bonaparte fueron tildados de «afrancesados», curioso término que no cargaba el acento sobre su colaboración política o militar con la potencia invasora, sino que por encima de todo des-

cribía su *cambio de ser*, su culposo abandono de las costumbres y pautas de conducta propios del país para convertirse en imitadores de la cultura francesa. El bando borbónico utilizó, pues, la nueva ideología nacionalista y en ella se apoyó su indiscutible triunfo en términos de imagen y de propaganda política. El enfrentamiento de 1808 a 1814, finalmente consagrado como «Guerra de la Independencia», acabaría por ser la base de toda la mitificación nacionalista española del siglo XIX (Álvarez Junco 1995). De manera inmediata, aportó sin duda un notable refuerzo a la identidad etno-patriótica previa.

¿Quiénes fueron los promotores de esta primera tarea constructora de la imagen nacional en la España contemporánea? Ciertamente, no la monarquía en sí. Durante el período Carlos IV-María Luisa-Godoy, el prestigio de la familia real había sufrido un serio deterioro y, pese a la exaltación de Fernando VII como mito movilizador durante la guerra anti-napoleónica, lo cierto es que tanto él como toda la familia se mantuvieron fuera del país durante los seis años que duró el sangriento conflicto y que, a su regreso, el propio «Descado», con su cerrada oposición al constitucionalismo, habría de malgastar en pocos años el inmenso capital de confianza depositado en él. Su hija Isabel, tras acceder de nuevo al trono bajo los mejores augurios como garante de un liberalismo moderado, se acabó anclando también en la legitimidad religiosa y dinástica tradicional distinguiéndose poco, al final, del inmovilismo representado por sus rivales carlistas y terminó expulsada del país en septiembre del 68 tras el éxito de una conspiración básicamente militar. Ni uno ni otra, en todo caso, se propusieron ser reyes «de los españoles», esto es, legitimarse en términos nacionalistas modernos, sino que plantearon su causa como herederos de los derechos dinásticos y defensores de la religión heredada.

Igualmente incapaz de dirigir el proceso fue el estamento nobiliario, dividido y desprestigiado en 1808 y más aún a medida que avanzaba la revolución liberal y aumentaba el poder de las nuevas clases medias enriquecidas. Familias aristocráticas o nobles individuales mantuvieron, sin duda, un considerable grado de poder local y en muchos casos intentaron tener protagonismo político, por cierto que desde las más diversas posiciones, ya que hubo nobles

carlistas, nobles liberales y hasta nobles «demócratas». Se intentó incluso, en algún raro momento, definir a la nobleza como columna vertebral de la nación, según hacía, por ejemplo, *El Heraldo* en 1842: «Nada recuerda mejor las grandezas de España que los apellidos ilustres que nos traen a la memoria días de gloria, y que son un estímulo del valor y de los hechos generosos. Las naciones que no estiman su aristocracia no se estiman a sí mismas (...). La aristocracia (...) conserva las tradiciones que conviene respetar» (cit. por Jover 1991: 146). Pero, en conjunto, no se puede decir que la nobleza, como cuerpo, fuera de ningún modo la vanguardia del proyecto nacionalista español de manera semejante a como lo fue, según Greenfeld (1992), en Inglaterra.

La Iglesia, por terminar con los antiguos grupos privilegiados, tampoco fue capaz de desempeñar un papel, ni siquiera parcial, en esta primera fase nacional-modernizadora. Aterrorizada ante la Revolución y depurada de elementos liberales por la reacción fernandina, perdió la complejidad que había mantenido hasta la Ilustración y se alineó en posiciones de extremo reaccionarismo durante el resto del siglo. Dirigida como institución internacional por papas encerrados física y simbólicamente en una pugna defensiva frente al mundo moderno, se limitó a una condena universal de los avances científicos y políticos como «errores», metiendo en un mismo saco desde el racionalismo filosófico hasta el liberalismo en cualquiera de sus versiones. En lo político, apenas fue capaz de ofrecer novedades doctrinales a lo largo del siglo: toda la legitimación necesaria para el poder era, para los pensadores católicos, la del Antiguo Régimen, y por tanto incluso el nacionalismo tenía tintes peligrosos. Las referencias a la «patria» que se encuentran en los documentos fernandinos o en los manifiestos carlistas no significan sino la defensa de una identidad tradicional, vinculada sobre todo a la religión, la legitimidad dinástica y —más tarde— a los privilegios políticos y jurídicos de los antiguos reinos. «Patria», en definitiva, era la suma de «Dios» y «Rey».

El mérito de la elaboración del primer proyecto nacionalista se debe atribuir, por tanto, a las élites políticas que dirigieron la resistencia anti-napoleónica, cuya cúpula más visible fueron los diputados de Cádiz. Conviene, por tanto, analizar, aunque sea brevemente,

aquel grupo social. Participaron en aquellas cortes 90 eclesiásticos, 56 abogados, 15 catedráticos, 39 militares, 49 funcionarios, 14 nobles, 20 comerciantes y 20 de difícil clasificación, aunque de dedicación intelectual (Villacorta, 1980: 12). Más que de una «burguesía» —como los siguen catalogando obstinadamente buena parte de nuestros historiadores—, se trataba, pues, de una *intelectualidad*, ya que eran grupos sociales cuyo denominador común era el control de unos medios de comunicación de creciente importancia como instrumentos de movilización política a medida que surgía el mercado cultural y educativo masivo: la prensa periódica, las cátedras universitarias, los bufetes de causas célebres, los escaños parlamentarios y, en este primer momento, los púlpitos; aunque los púlpitos, sin duda, fueron siempre más absolutistas que liberales y en las décadas siguientes los eclesiásticos liberales desaparecerían, por lo que esta intelectualidad debería, casi desde su origen, calificarse como *laica*. En buena medida, esta élite se hallaba ligada al Estado, bien fuera como funcionarios o como profesionales liberales cuya titulación —y el consiguiente derecho a monopolizar un determinado ramo de actividad— era otorgada por el poder público; y no es extraño, por tanto, que su objetivo político consistiese en reforzar ese mismo Estado para convertirlo en el instrumento de la modernización social y económica del país. Las élites liberales iban a ser en la España del XIX no menos estatistas que los reformistas ilustrados del XVIII.

Pero había un rasgo inesperadamente nuevo en esta tarea nacionalizadora inicial de las élites liberales españolas, que alejaba radicalmente su creación político-cultural del etno-patriotismo ilustrado: el *populismo*. De que el proyecto ilustrado era etno-patriótico o pre-nacionalista hay pocas dudas, ya que, no sólo tendía a fortalecer el Estado, sino que para ello lo vinculaba a una identidad cultural: recuérdense la creación de academias «reales» (cuyo objetivo era cultivar la cultura nacional), las múltiples defensas de la lengua, las reediciones de clásicos castellanos, etc. Pero, convencidos como estaban de que la decadencia de la era de los Habsburgo se había debido a muchas de las actitudes y valores culturales tradicionales (desprecio del trabajo manual, excesivo número de fiestas religiosas y laborales, despoblación del país debido al celibato eclesiástico, aislamiento frente a

los avances científicos, etc.), los reformistas ilustrados habían hecho explícitos intentos de desarraigados. Ello les convirtió en fácil blanco de críticas por parte de los sectores conservadores, que les tildaron de extranjerizantes, una acusación que halló eco sobre todo entre las capas populares, sin duda las más apegadas a los hábitos heredados. A los letrados, clérigos o nobles que desde los consejos, cancillerías o sociedades de Amigos del País apoyaban las reformas borbónicas no se les hubiera pasado por la imaginación pensar en el pueblo como palanca de los cambios políticos, ni mucho menos creerlo el depositario de las esencias patrias. Por el contrario, se daba por supuesto que un proyecto como el suyo, de racionalización general de las estructuras económicas y sociales —de acuerdo con lo que por el término razón se entendía en el mundo liberal-ilustrado del momento—, iba a encontrar su más serio obstáculo en las clases bajas, asociadas para ellos con ignorancia, brutalidad, prejuicios y rutina. En resumen, la actitud ilustrada en relación con el pueblo era típicamente pedagógico-paternalista, y nada había más ajeno a aquellos dirigentes que el majismo, el taurinismo o el tippismo.

Los diputados gaditanos, en una coyuntura política muy distinta, intentaron superar los clásicos inconvenientes de «extranjerismo» y anti-populismo asociados con las reformas modernizadoras. Su proyecto nacionalista iba más lejos que el de los ilustrados: se trataba también ahora de modernizar la economía y fortalecer al Estado, pero a la vez de democratizar el poder, de arrebatarle la soberanía al monarca absoluto y los linajes hereditarios y atribuírsela al pueblo (la nación). Nadie expresó quizá la vinculación entre nacionalismo y reformas políticas como Argüelles en su «¡Españoles, ya tenéis patria!» al presentar la Constitución. Dado que el apoyo popular era imprescindible en una tarea que iba a encontrar obvios obstáculos entre la corona y las clases privilegiadas, los ideólogos liberales trataron de elaborar un proyecto político que, sin dejar de ser innovador, fuese a la vez reconocible por el pueblo, es decir, arraigado en la identidad tradicional. De ahí sus esfuerzos por presentar la Constitución de Cádiz como un retorno a las leyes tradicionales o «verdaderamente españolas», esto es, a los fueros medievales que limitaban el poder real.

A estos esfuerzos se añadió una mitificación de la actuación popular en la guerra de 1808-1814. Según la versión que pasó a ser canónica, la resistencia contra Napoleón —acontecimiento fundacional de la moderna nacionalidad española— había sido promovida por la voluntad desesperada y suprema del pueblo, en un momento en que el Estado y las minorías rectoras se habían hundido o habían traicionado a la patria. De ahí a presentar al pueblo como sujeto en el que residía la fuerza moral de la nación, una especie de núcleo incorruptible y dotado de un instinto político innato, no había más que un paso: un paso que se dio inmediatamente, ayudado por los vientos románticos que estaban haciendo su aparición en Europa justamente en aquellos años. Pero su duración, en el caso del liberalismo español, iba a ser mucho mayor que la de aquella moda literaria. Durante todo el resto del siglo, hasta llegar al propio 1898, los liberales y demócratas siguieron esperando que, por grande que fuera la degradación de las instituciones y aun de las propias élites —incluidos los elaboradores del discurso; en las élites populistas hay siempre, por definición, un elemento autodenigratorio—, el Pueblo habría de reaparecer, cual Héroe Dormiente, y con su intervención redentora salvaría a la Patria.

Curiosamente, y pese a este populismo teórico, las élites liberal-progresistas españolas se mantuvieron, en la práctica, muy alejadas de las capas populares, especialmente agrarias —la inmensa mayoría—, durante casi todo el siglo. Creyéndose, probablemente, su propia retórica, lanzaron repetidas convocatorias al pueblo, en términos patrióticos que seguían la invocación de Argüelles, para que secundase sus planes revolucionarios: planes que incluían la liberalización de la economía, la desaparición de las diferencias estamentales y el constitucionalismo, es decir, el respeto por los derechos individuales y la limitación y democratización del poder público. Pero que significaban también centralización gubernamental, desaparición de privilegios y costumbres locales, aumento del peso político y social del mundo urbano sobre el rural, establecimiento de una economía monetaria, apertura de mercados, creación de nuevos impuestos... Si la primera lista de objetivos podía resultar atractiva para las capas trabajadoras de la población, siempre que fueran adecuadamente explicados, la segunda muy difícilmente

iba a ser aceptada, es particular por el mundo rural. Y no hay que olvidar que estamos hablando de un país abrumadoramente rural, con una población adulta compuesta por un 90 % de analfabetos y cuya principal fuente de información sobre la marcha del mundo era el sermón semanal. Lo cual explica que las masas populares, lejos de identificarse como el supuesto retorno a las libertades tradicionales españolas y de sentirse agradecidas por haber sido convertidas en portadores de la soberanía, jalearan las actuaciones más brutales de Fernando VII y más tarde apoyaran al carlismo (Aróstegui, 1991; Canal, 1993), al menos en áreas rurales. Y explica también que los liberales tuvieran que refugiarse más aún en su jacobinismo estatista: la sociedad española sólo podría transformarse a golpe de Gaceta.

Pero la *Gaceta* no estaba en sus manos. La revolución liberal fracasó y sus defensores vieron cómo transcurría todo el primer tercio de siglo, con las breves excepciones de Cádiz y del Trienio Liberal, sumidos en la impotencia, cuando no directamente en prisión o en el exilio (Lloréns, 1968). Las circunstancias sólo cambiaron en 1833, cuando la muerte de Fernando VII y el acceso al trono de una niña, con una reina viuda extranjera como regente, dieron lugar a una coyuntura política que permitió el retorno de los liberales e incluso colocó en el poder a su fracción más moderada. Estos últimos serían quienes, tras altibajos y avatares sin cuento cuyo repaso excede de los límites de este artículo, acabaron elaborando la fórmula política que (de nuevo con breves interrupciones revolucionarias: un *Bienio*, un *Sexenio*) habría de dominar durante el resto del siglo. Tal fórmula política consistió, en síntesis, en un régimen constitucional liberal, pero no democrático, es decir, en el que sólo participaba en el juego político legal un núcleo social muy reducido: la antigua aristocracia junto con los nuevos industriales y financieros, los enriquecidos con la especulación urbana y la construcción de los ferrocarriles, más las nuevas clases terratenientes surgidas de la desamortización eclesiástica y los rangos superiores del ejército y la administración. En total, entre un 2 y un 5 % de la población, según los momentos.

Paralelamente a esto que Richard Herr (1971) ha llamado el «atrincheramiento de una nueva oligarquía», y a la consolidación del correspondiente régimen constitucional liberal-

moderado, una nueva versión de la identidad nacional se impuso, a mitad de camino entre la utilizada por los liberales en su fase revolucionaria y el viejo etno-patriotismo católico-dinástico. El mejor ejemplo de este nacionalismo ecléctico podría encontrarse en las múltiples historias de España que se escribieron en las décadas centrales del siglo (de las que fue paradigmática la de Lafuente, 1850-68). Se cantan en ellas las glorias de la raza, remontándose a un larguísimo pasado (dos milenios y medio, como mínimo: o, directamente, el comienzo de la historia humana, que se suponía estar situado inmediatamente después del Diluvio Universal), cuyo sentido o racionalidad última consistía en haber sido un proceso dirigido hacia la unidad nacional española, de la que la monarquía liberal moderada era su expresión moderna. Las grandes transformaciones de la historia peninsular, tales como las sucesivas irrupciones de pueblos y civilizaciones, se explicaban como capas o ingredientes que habían contribuido a la formación del carácter nacional, a la vez que como invasiones frente a las que «los españoles» habían opuesto feroz resistencia (con ejemplos que inevitablemente comenzaban en Sagunto y Numancia y culminaban en Zaragoza y Gerona frente a los ejércitos napoleónicos, lo que probaba la pervivencia de un núcleo de identidad esencial permanente).

La principal diferencia entre esta versión del pasado nacional español y las que se estaban elaborando en esa misma época por otros pueblos europeos, es su carácter autocomplaciente *pasivo*, es decir, no movilizador, desvinculado de cualquier proyecto político inmediato (Jover, 1984). Frente a lo ocurrido en el primer momento, en que las referencias al carácter independiente de los españoles cumplían una función movilizadora inmediata contra el dominio napoleónico, lo que ahora se subraya es un poso pretérito de motivos de orgullo por haber nacido español; haber poseído la religión verdadera desde el origen de su predicación, haber sido obstinadamente fieles a una forma de ser y haber acumulado glorias militares incomparables con cualquier otro pueblo; pero nada de ello estaba vinculado a proyectos políticos en curso de realización. Y esta ausencia de objetivos inmediatos regía tanto para el plano interno como para el internacional. En lo interno, no había referencias a reformas o revoluciones pendientes, ya que se suponía haber alcanzado

ya un equilibrio político basado en el sabio punto medio de los doctrinarios; lo cual explica que en el nacionalismo moderado no haya lugar para el populismo típico del liberalismo progresista, y que el pueblo se halle ausente, excepto en referencias retóricas de pasada a su papel en 1808 o en abiertas recomendaciones de moderación e ilustración, que recuerdan las actitudes pedagógico-paternalistas del XVIII. En lo internacional, tampoco había reclamación de territorios irredentos o justificación de proyectos expansivos imperiales; es muy significativo, a este respecto, el escaso lugar que ocupa en estas historias la conquista del imperio americano, cuya reciente pérdida lo convertía en objeto de idealización, cuando mínimo, conflictivo.

Las excepciones a lo dicho son escasas, aunque existen. Por un lado, se sabe que hay un territorio irredento en Gibraltar, pero es curioso el tacto y el cuidado con que se menciona este tema en el nacionalismo español del XIX (muy al contrario de lo que ocurriría en el agresivo discurso fascista de los años 1930); lo cual es explicable, ya que una exigencia sería en este terreno hubiera supuesto enfrentarse con la indiscutible primera potencia mundial del momento. Por otro, hay referencias al iberismo, o unión con Portugal, un sueño que en realidad pertenece a la versión liberal-progresista del españolismo, más agresiva y movilizadora que la moderada, y cuya presencia en todo caso se diluye a medida que se aproxima el fin de siglo. Hay también utópicas alusiones a una posible reconquista del antiguo imperio americano, o a la formación de una confederación de pueblos ibéricos encabezada por España frente al mundo anglosajón, algo que tiene que ver con las expediciones de la época de O'Donnell a Méjico, a la Dominicana o al Callao, todas ellas proyectos fracasados casi antes de haber nacido. La única auténtica excepción, el único proyecto expansivo con visos realistas, aunque muy modesto para los niveles europeos de la época, se relaciona con Marruecos, cuya sumisión a influencia española se justifica por el nacionalismo moderado como una continuación de la «Reconquista» y la culminación de una supuesta vocación o destino nacional antimusulmán, expresamente reflejado en el testamento de Isabel la Católica. Este último proyecto acabó dando lugar a una efectiva ampliación de los territorios de Ceuta y Melilla,

comenzando por la guerra de Tetuán, en 1859-60 (que dio lugar a la mayor retórica patriótica del siglo, expresada quizás mejor que nadie por Alarcón, 1860), y terminando por las guerras de las primeras décadas del siglo XX, que a su vez tuvieron como resultado el establecimiento de un pequeño «imperio español» en el norte de Marruecos.

Esta fue, pues, la versión de la identidad nacional en la que se socializaron las generaciones nacidas a partir de los años 1830-40 y hasta, al menos, 1898. Era el momento de la industrialización acelerada de los países europeos más avanzados, a la vez que el de la más dura competencia entre ellos por el dominio del resto del mundo, una partida en la que España jugaba el papel, si no de convidado de piedra, sí de potencia de tercera categoría; un indicio de la situación era el hecho de que, siendo una potencia que había participado en *todas* las grandes guerras europeas desde finales del siglo XV hasta el período napoleónico, no participaría en *ninguna* en todo el resto de los siglos XIX y XX. Mas quizá fue precisamente este aislamiento, es decir, el hecho de no verse sometidos a ninguna tensión internacional sería, el que permitió que subsistiera sin mayores problemas la unidad política española y se transmitiera a lo largo de varias generaciones la versión liberal-moderada de las glorias nacionales.

Eludiendo de esta manera tensiones peligrosas, a punto estuvo el Estado español de conseguir llegar con éxito hasta el fin de siglo. Pero dos años antes de esa fecha, una potencia —para colmo de ignominia, no europea; sin tradición militar, como se decía con desprecio al principio y con amargura al final— arrebató a España su últimos territorios americanos y oceánicos. Vista en términos de *realpolitik*, la guerra de 1898 no tenía por qué haber tenido consecuencias tan graves. España perdió en ella el último 2% del imperio americano, y en 1825, cuando España había perdido el 98% anterior y había pasado a ser potencia de tercera categoría, los cronistas apenas habían consignado el hecho. El 98, por otra parte, tampoco tuvo consecuencias económicas fatales: la peseta se estabilizó, tras la guerra, y retornaron de las ex-colonias capitales que supusieron una importante inyección para la fase industrializadora con que se abrió el siglo XX. Pero la crisis se vio sobredimensionada por razones culturales, directamente relacionadas con la construcción

de mitos nacionales de la etapa anterior. En 1825, «el rey» había perdido unos territorios, mientras que ahora, tras décadas de retórica sobre el carácter marcial invencible de la raza española, era ésta quien había sufrido una humillación y había hecho una demostración de incompetencia a la vez que sus vecinos franceses e ingleses probaban en escenarios asiáticos y africanos la superioridad de los europeos.

Ello explica la enorme desazón originada por el «Desastre», a la que dedicaré un par de páginas para concluir este artículo. Repentinamente, las élites españolas tomaron conciencia del atraso nacional y se cuestionó, aparte del carácter oligárquico de las instituciones o de la corrupción de las élites rectoras, la idea misma de España, la calidad de la esencia nacional. Tras siglos o milenios (pues la tradición venía de Isidoro de Sevilla) de loores a la belleza de la tierra hispana, la benignidad de su clima o la feracidad de sus campos, se atreve alguien ahora a proclamar que *nuestra* realidad básica es negativa: la tierra es árida, la raza es apática y perversa (debido sin duda a la influencia oriental, al «africanismo» de la sangre). Pero el 98 cierra sobre todo el ciclo de ensoñamiento y auto-complacencia representados por el nacionalismo ecléctico de la fase liberal-moderada. La mitología patria, como es propio de estos momentos infantiles, pasa del extremo ensalzamiento a la denigración completa: y Costa o Unamuno escriben que hay que cerrar con siete llaves el sepulcro del Cid, hacer morir a Don Quijote, arrojar al mar el cadáver de Colón. Sin embargo, como la situación tampoco permitía prescindir de mitos étnicos, se recurre a otro, Europa: *toda* Europa es moderna, sólo nosotros somos un «desastre» o «fracaso»; y se ponen las esperanzas en la solución de los problemas del país a través de su «europeización». El dilema del siglo XVIII se hace ahora mucho más dramático, ya que para progresar hay que *renunciar a ser lo que somos*, eliminar los elementos africanos, ser europeos de una vez, adquirir los valores pragmáticos de los anglosajones; el cambio de esencia, del que se acusaba a los afrancesados noventa años antes, se propone ahora como redención para el conjunto nacional.

No es preciso insistir en los enormes inconvenientes que presentaba una reacción de este tipo. Por un lado, su falta de realismo, en cierta forma inevitable dado el enfoque racista con

que se entendían los problemas nacionales en el momento: ¿cómo se podía cambiar de «manera de ser»? Era un callejón sin salida. Si la raza era mala, en último extremo sólo se podía terminar en el tipo de conservadurismo pesimista y cínico (tenemos, en definitiva, las instituciones que merecemos) al que llegaron críticos tan duros, en el primer momento, como Azorín o Baroja. Por otro lado, el nacionalismo de los noventayochistas era demasiado crítico, demasiado doloroso para la autoestima y vinculado a un proyecto de reforma política demasiado radical. Era imposible aunar voluntades a partir de aquellas premisas. Por último, era una curiosa reacción nacionalista etérea, apolítica, desvinculada de un proyecto de fortalecimiento del Estado o creación de otro alternativo. Los intelectuales del 98 se identifican con una España abstracta, y odian en realidad al Estado, y en particular a sus manifestaciones militaristas e imperiales (su posición contra los juicios de Montjuich, contra la Ley de Jurisdicciones, contra las nuevas guerras coloniales en Marruecos, así lo atestiguan; esa, sin duda, había sido también la postura de los intelectuales franceses dreyfusards, pero la actitud de estos cambiaría en 1914). Quizás sirva de ilustración muy expresiva de esta desconexión de las élites con el Estado la comparación entre la Institución Libre de Enseñanza (en la que había una indiscutible preocupación por el «problema nacional») y las Altas Escuelas francesas: mientras que estas dirigían sus esfuerzos a crear funcionarios de élite para el Estado, aquella creaba, sobre todo, humanistas independientes, cuya conexión con el Estado sería sólo indirecta, a través de la enseñanza universitaria.

Una última observación, para concluir el 98. Además de los inconvenientes señalados en la construcción político-cultural elaborada por los intelectuales críticos del momento, caben dudas sobre la propia capacidad modernizadora de esas mismas élites, sobre su propia comprensión del proyecto modernizador del que tanto se jactaban. Si los clasificamos en términos similares a los aplicados a los diputados gaditanos, nos encontraremos con que se trata de abogados, de profesionales liberales o de escritores, de procedencia provinciana, aunque afincados en Madrid, y de base agraria rentista. No están vinculados al empresariado industrial, ni parecen conocer los problemas de la producción o del mundo económico; ni siquiera se encuen-

tran entre ellos escritos o reflexiones sobre aspectos concretos del desarrollo científico; la Ciencia es un mero referente mítico, un arma retórica que arrojar contra el gobierno. Y su preocupación por la «cuestión social» tiene más que ver con el miedo —o la esperanza— que les inspira el movimiento obrero que con soluciones concretas a problemas laborales. En muchos casos, se encuentran incluso entre ellos expresiones abiertamente anti-modernas: contra la sociedad de masas, contra el anonimato de la producción en cadena o de las nuevas urbes sin alma (Lily Litvak, 1975; Guillén, 1994). Si alguien impulsa a España hacia una segunda revolución industrial en el primer tercio del siglo XX (la de la electricidad, los teléfonos, los autos y aviones), serán quizás los empresarios, fundamentalmente vascos y catalanes, o los jesuitas que crean los IESA y ESADE, o los católico-paternalistas como Aunós que dan un primer código laboral en la historia del país. Los intelectuales del 98 no sólo no intervienen en estos procesos, sino que no parece que les interesen.

Esta situación explica que el nacionalismo regeneracionista crítico, europeísta, tuviera tan corta vida política y diera paso tan rápidamente a una segunda fase, que se ha llamado *casticismo*, en la que la afirmación nacionalista adoptó tonos más homologables con el resto de Europa. Para convertirse en una entidad colectiva defendible, España se presentaba en esta versión, retomando en parte la mitología romántica, como una personalidad excepcional, que se movía en un mundo de valores distinto al de la modernidad (es decir, distinto a Europa): el mundo de las creaciones artísticas de alto valor humano (Cervantes, la mística), no el mundo de la técnica y el pragmatismo (que inventen ellos). Es el contexto simplón, y más agresivo, en el que se vivirá la afirmación nacional del primer tercio del siglo XX. En él, la ideología nacionalista española, lejos de estar vinculada a proyectos democrático-modernizadores, como en el XIX, se ha convertido ya en una baza de las fuerzas conservadoras, como se demostrará sobre todo en la Guerra Civil de 1936-1939.

En esas tres décadas, las élites críticas herederas del 98 han empezado a perder interés por el españolismo como proyecto redentor. En algún caso, porque se embarcan en otros proyectos nacionalistas alternativos, como el catala-

nismo o el vasquismo. En otros, porque van siendo atraídos por otro tipo de promesa redentora, esta vez del pueblo entendido como clase y no como nación: la revolución obrera. De ahí que el nacionalismo españolista se utilice como arma movilizadora para contener la revolución y los separatismos. Es ya la plena ideología nacionalista acrítica, triunfalista, de masas, que personificaron Primo de Rivera o Franco. Y de su asociación con esta papel contrarrevolucionario y con el régimen franquista vienen su desprestigio y sus problemas actuales.

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÓN, Pedro Antonio (1860): *Diario de un testigo de la Guerra de África*. Madrid.
- ALVAREZ JUNCO, José (1994): «Ciencias sociales e historia en los Estados Unidos: el nacionalismo como tema central», *Ayer* 14: 63-80.
- ALVAREZ JUNCO, José (1995): «La invención de la Guerra de la Independencia», *Studia Historica*. (En prensa.)
- ANDERSON, Benedict (1991): *Imagined Communities*. Nueva York, Verso.
- ARMSTRONG, John A. (1982): *Nations Before Nationalism*. Univ. of N. Carolina.
- ARÓSTEGUI, Julio (1991): «El carlismo y la guerra civil». En J. M. Jover (Ed.) *Historia de España. XXXIV. La era isabelina y el Sexenio democrático*. Madrid, Espasa Calpe, pp. 69-139.
- BERAMENDI, Justo G. (1992): «La historiografía de los nacionalismos en España», *Historia Contemporánea*. 7: 135-54.
- BLAS GUERRERO, Andrés de (1989): *Sobre el nacionalismo español*. Madrid, C. E. C.
- CANAL, Jordi (Comp.) (1993): *El carlisme. Sis estudis fonamentals*. Barcelona, L'Avenç.
- COLLEY, Lynda (1992): *Britons*. Yale Univ. Press.
- DEUTSCH, Karl (1966): *Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality*. M. I. T. Press.
- EDWARDS, John (1985): *Language, Society, and Identity*. Oxford, Blackwell and Deutsch.
- FUSI, Juan P. (1990): «Center and Periphery, 1900-1936. National integration and Regional Nationalisms Reconsidered». F. Lannon & P. Preston *Elites and Power in Twentieth-Century Spain*, Londres, 1990: 33-40.
- GELLNER, Ernest (1987): *Nations and Nationalism*. Ithaca, Cornell Univ. Press.
- GREENFIELD, Liah (1992): *Nationalism. Five Roads to Modernity*. Harvard Univ. Press.
- GRILLO, R. D. (Ed.) (1980): *Nation and State in Europe. Anthropological Perspectives*. Londres, Academic Press.
- GUILLÉN, Mauro (1994): *Models of Management. Work, Authority, and Organization in a Comparative Perspective*. Univ. of Chicago.
- HAYES, Carlton J. H. (1933): *Essays on Nationalism*. Nueva York, Macmillan.
- HAYES, Carlton J. H. (1960): *Nationalism: A Religion*. Nueva York, Macmillan.

- HERR, Richard (1971): *An Historical Essay on Modern Spain*. Berkeley Univ. Press.
- HOBBSBORN, Eric (1990): *Nations and Nationalism since 1780*. Cambridge U. P.
- HOBBSBORN, E., y RANGER, T. (Eds.) (1983): *The Invention of Tradition*. Cambridge U. P.
- HROCH, Miroslav (1985): *Social Pre-conditions on National Revival in Europe. A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations*. Cambridge U. P.
- HUTCHINSON, J. (1987): *The Dynamics of Cultural Nationalism*. Londres, Allen & Unwin.
- ISAACS, Harold R. (1975): *Idols of the Tribe. Group Identity and Political Change*. Harvard U.P.
- JOYER, J. M. (1984): «Caracteres del nacionalismo español, 1854-1874», *Zona Abierta*, 31: 1-22.
- JOYER, J. M. (1991): *Historia de España. XXIV. La Era Isabelina y el Sexenio Democrático*. Madrid, Espasa-Calpe.
- KEDOURIE, Elie (1961): *Nationalism*. Londres, Hutchinson.
- KOHN, Hans (1944): *The Idea of Nationalism: A Study in Its Origins and Background*. Nueva York, Collier.
- KOHN, Hans (1965): *Nationalism. Its Meaning and History*. Nueva Jersey, D. Van Nostrand.
- KOHN, Hans (1968): «Nationalism». *The Int. Encycl. of Social Sciences*, vol. 11. Nueva York, Macmillan and Free Press.
- LAFFENTIL, Modesto (1850-68): *Historia General de España*. Madrid, Tipogr. Mellado, 30 vols.
- LINZ, Juan (1973): «Early State-Building and late Peripheral Nationalisms against the State: The Case of Spain». en *Daedalus*, 1973, pp. 32-116.
- LINZ, Juan (1992): «Los nacionalismos en España. Una perspectiva comparada». *Historia y fuente oral*, 7: 127-135.
- LITVAK, Lily (1975): *A Dream of Arcadia. Anti-Industrialism in Spanish Literature*. Austin, Univ. of Texas Press.
- LLORRÉNS, Vicente (1968): *Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra, 1823-1834*. Madrid, Castalia.
- MOSSE, Georg (1975): *The Nationalization of the Masses. Political symbolism and Mass Movements in Germany from the Napoleonic Wars Through the Third Reich*. Nueva York, Fertig.
- MOSSE, Georg (1985): *Nationalism and Sexuality: Respectability and Abnormal Sexuality in Modern Europe*. Nueva York, Fertig.
- PAYNE, Stanley G. (1991): «Nationalism, Regionalism and Micronationalism in Spain». *Journal of Contemporary History*, 26: 479-491.
- RIQUER, Borja de (1990): «Sobre el lugar de los nacionalismos en la historia contemporánea española». *Historia Social*, 7: 105-26.
- RIQUER, Borja de (1994): «La faiblesse du processus de construction nationale en Espagne au XIXe siècle». *Revue d'Histoire moderne et contemporaine*, 41-2: 353-366.
- ROKKAN, Stein, et al. (1973): *Nation-Building. A Review of Recent Comparative Research and a Select Bibliography of Analytical Studies*. Boston & Stols.
- SILTON-WATSON, Hugh (1977): *Nations and States: An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism*. Boulder, Westview Press.
- SMITH, Anthony D. (1979): *Nationalism in the Twentieth Century*. Nueva York, U. Press.
- SMITH, Anthony D. (1983): *Theories of Nationalism*. Nueva York, Holmes and Meyer.
- SMITH, Anthony D. (1987): *The Ethnic Origins of Nations*. Nueva York, Blackwell.
- VILAR, Pierre (1984): «Estado, nación y patria en España y Francia». *Estudios de Historia Social*, 28-29: 7-41.
- VILLACORTA BAÑOS, Francisco (1980): *Burguesía y cultura. Los intelectuales españoles en la sociedad liberal, 1808-1931*. Madrid, Siglo XXI.
- WEBER, Eugen (1976): *Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural France, 1870-1914*. Stanford U. P.

